

CAPÍTULO I

ALGO MÁS QUE UN FIN DE SEMANA EN QUINTOS DE MORA

Todos los cementerios están llenos de gente que se consideraba imprescindible.

GEORGES CLEMENCEAU

LUIS —nombre ficticio— estaba nervioso. Desde la última vez que había pasado por allí el entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para descansar un fin de semana, no había vuelto a ver a ningún miembro del Gobierno. La verdad es que la finca, de 6.865 hectáreas dedicadas a la caza, es, junto a Doñana, una de las «joyas de la corona» de Patrimonio Nacional. Allí viven todo el año unos guardeses, Luis entre ellos, pero está poco frecuentada. Así que el equilibrio de reses salvajes lo mantienen ellos, los únicos autorizados a cazar desde que el presidente Aznar prohibiese cualquier actividad cinegética en la finca.

Fue Aznar, de hecho, quien la puso de moda entre la opinión pública española al recibir allí un fin de semana al presidente de los Estados Unidos George Bush, quien llegó a decir que le recordaba a su rancho de Texas. Bush no fue el único. Aznar recibió en Quintos de Mora, así se llama la

finca, hasta catorce mandatarios extranjeros, desde Tony Blair a Andrés Pastrana o Vicente Fox. Felipe González sí que cazó en ella; de hecho en su haber cuenta con uno de los venados más codiciados por los amantes de este deporte.

Llegó José Luis Rodríguez Zapatero y Quintos de Mora cayó en desuso. Probablemente porque al nuevo presidente le traía malos recuerdos y porque en estos años han sido escasas las visitas de mandatarios extranjeros a nuestro país. Así que salvo un par de veces José Antonio Alonso, casi ningún otro miembro del Gobierno aterrizaba por allí hasta que llegó Mariano Fernández Bermejo al Ministerio de Justicia.

Luis no sabía mucho del ministro, salvo que le gustaba la caza y gastaba bastante mal genio. Ya le habían avisado de que el personal de la finca tenía que estar a su servicio, gratis, por supuesto, pero con el menor contacto personal posible. «Qué humos se gastan estos socialistas», pensó Luis. Aznar, cuando iba allí, se llevaba al personal de Moncloa para asignar el gasto a su departamento de Presidencia. «Éstos se creen que una vez que han llegado al Gobierno todo lo público es suyo», le comentó a su mujer mientras aguardaban la llegada del ministro, junto a su esposa y su hija.

Enseguida aparecieron a lo lejos las luces del *Jeep* de la Guardia Civil y, detrás, el coche del ministro y el de la escolta. Aparcaron en la entrada y el chófer se apresuró a abrir la puerta del coche para que bajara el ilustre invitado. «Ocupense de las maletas», espetó Bermejo a Luis y a su mujer sin casi mirarles, «y preparénnos algo de cenar después de enseñarnos la casa. Luego quiero dar una vuelta por los alrededores». El ministro y su familia pasarían tres días seguidos en la finca. Su intención, hacer guardos nocturnos de jabalíes y una montería, en la que tenía previsto recibir invitados.

Bermejo le dio las oportunas instrucciones a Luis sobre sus planes para el largo fin de semana, y una final: «Aquí sólo cazo yo, los guardeses, a partir de ahora, tienen prohibida la caza». «Vaya —pensó Luis—, con éstas venimos.» La caza estaba, y sigue estando, prohibida; con la excepción sólo de la que sea necesaria para mantener el equilibrio ecológico de la zona. Un detalle menor que no importaba mucho al ministro Bermejo. El ministro más «rojo» del Gobierno, según se definía a sí mismo el hijo de un ex jefe de la Falange Española y de las JONS, era un gran aficionado a una de las actividades que más se prodigaban en el franquismo entre aquellos que ocupaban las altas esferas del poder. Estampa que se haría un hueco en el imaginario colectivo gracias a una película filmada por Luis García Berlanga, *La escopeta nacional*, en la que, por cierto, también había un personaje que respondía al apellido de Bermejo.

Esa misma noche Bermejo participó en su primera aguada de jabalíes y abatió dos ejemplares. El jabalí tiene una carne muy preciada y su cabeza es habitual en los establecimientos de taxidermistas para colgar como trofeo en la pared de sus cazadores. Bermejo elegiría la más gallarda para llevársela a su vivienda unifamiliar en las afueras de Madrid, puesto que ya por aquel entonces ocupaba el famoso ático reformado de Plaza de España.

Luis apuntaba cuidadosamente en un cuaderno los resultados de la caza del ministro. «¿Qué hace?», le espetó éste. «Es que luego hay que hacer un memorándum del coto para presentarlo a la Dirección General de Política Forestal para que la Junta tenga constancia de que aquí se caza cumpliendo todas las normativas...», respondió muy serio Luis. «Deje de apuntar, hombre, yo soy el ministro y hago lo que me sale

de los cojones sin que nadie me controle, coño. Los fachas ya cazaron todo lo que quisieron, y ahora me toca a mí.»

Quintos de Mora no era el único coto visitado por Bermejo, que acude con bastante frecuencia a monterías privadas de alto nivel, aquellas en las que el puesto de caza no se cotiza por debajo de los tres mil euros —precio al que hay que añadir después el de las piezas cobradas, y que pueden llegar hasta los siete mil euros—. En noviembre de 2008 Bermejo acudió a cazar a la finca El Sotillo, propiedad del empresario Ramón Lorenzo, en Fuenlabrada de los Montes, y su puesto costó seis mil euros. También acude a los cotos de Peñas Blancas —Ciudad Real—, y Balandrinos —Toledo—, donde suele ir acompañado del empresario Francisco Samper.

¿Pero para tanto da el sueldo de un ministro?, se preguntaron los diputados de la oposición cuando salió a la luz la cacería de Bermejo y Garzón. Y en caso contrario, ¿a cambio de qué eran esos regalos? La afición cinegética de Bermejo es cara. Tan cara que sólo por presumir es capaz de gastarse un millón de pesetas en comprar una cabeza de venado después de una cacería fallida. Un comportamiento muy progresista y muy propio de alguien que se considera de «izquierdas» y que forma parte de un gobierno obligado con el cuidado del medio ambiente y el ecologismo.

Antonio —otro nombre ficticio— circulaba tranquilo por la A-5, carretera de Extremadura, entre Móstoles y Villaviciosa de Odón, cuando tres coches y una furgoneta le adelantaron con enorme rapidez. Acudía a visitar a un viejo amigo, taxidermista y cazador. Cuál no sería su sorpresa cuando, al llegar al lugar, se encontró con que la furgoneta y los tres coches se encontraban en el mismo lugar al que iba él. Y allí estaba el ministro Fernández Bermejo charlando con

su amigo. En un momento dado, los acompañantes del ministro entraron en el taller y sacaron una enorme y majestuosa cabeza de venado y la introdujeron en la furgoneta. Otro de los acompañantes se acercó a su amigo y le entregó un sobre. Un fajo de billetes de quinientos euros hasta sumar doce de ellos, es decir, seis mil euros. Muy propio de un ministro, pensó Antonio, quien no pudo resistir la tentación de interrogar a su amigo.

—Es que hace un par de años estuvimos de caza juntos en una finca de Jaén. Él no consiguió abatir ninguna pieza, pero yo conseguí un venado que le entusiasmó.

—¿Y ha venido hasta aquí para comprarla? —preguntó Luis.

—Sí, ya ves. Se encaprichó, le puse un precio y aceptó.

Nada de todo esto habría tenido la mayor trascendencia ni hubiera ocupado más de un breve en las páginas de los periódicos si Mariano Fernández Bermejo no hubiera sido «pillado» *in fraganti* de cacería junto al juez Baltasar Garzón. Lo que no podía sospechar es que su afición a la «caza mayor» le acabaría costando un puesto para el que, según él iba diciendo por ahí, Zapatero le había elegido para un período no menor a cinco años —uno de la pasada legislatura y cuatro de la presente—. Mal presagio.

Su afición por los venados daría la vuelta a España a raíz de su cacería junto al juez Baltasar Garzón el mismo fin de semana en el que el magistrado había ordenado las primeras detenciones de la «Operación Gürtel». Una investigación con la que el juez quería implicar al PP en una trama de corrupción generalizada.

El lunes 9 de febrero el diario digital *La Nación* destapaba el que sería uno de los escándalos más sonados del Gobierno

de Rodríguez Zapatero: Bermejo había pasado ese mismo fin de semana con Garzón y con la también fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado. La montería dio comienzo el viernes 7 de febrero, un día después de que el diario *El País* comenzara su serie de filtraciones sobre la «Operación Gürtel», una supuesta trama de corrupción en el Partido Popular en la que estaba implicado como cabecilla de la misma el empresario, Francisco Correa, una persona a la que durante años el PP dio trabajo como organizador de todos los actos electorales del partido, pero a la que en 2004 Mariano Rajoy había apartado por las sospechas de que estaba utilizando el nombre del Partido Popular en beneficio propio, para obtener contratos de numerosos ayuntamientos gobernados por el PP.

Al margen de la trama, de la que nos ocuparemos más adelante, lo más significativo fue que la misma apareciera ocupando las portadas de los medios de comunicación en plena campaña electoral de las elecciones gallegas y vascas del 1 de marzo. Era evidente que las filtraciones de un sumario que se encontraba bajo secreto afectaban de manera directa a las expectativas electorales del PP, que, sin embargo, logró reconducir el asunto gracias, precisamente, a la «metedura de pata» de Bermejo y Garzón, arte y parte, cazando juntos en Jaén el fin de semana de apogeo mediático de la Gürtel. Cuando luego se supo, además, que también había participado de la experiencia cinegética el comisario jefe de la policía judicial encargada de investigar el caso, Juan Antonio González, la montería adquirió tintes de conspiración político-judicial-policial contra el principal partido de la oposición.

El viernes 6 de febrero, a eso de las ocho de la tarde, el Hotel del Val, en la localidad de Andújar, recibe la visita de

unos personajes ilustres. Situado a los pies de Sierra Morena y a orillas del Guadalquivir, a 210 metros de altitud, el Hotel del Val es uno de los pocos lugares selectos de la zona, perfecto para descansar la noche antes de una intensa montería. Se trata de un hotel pequeño, de setenta y nueve habitaciones, una decoración entre casposa y rancia, como extraída de una película de Berlanga, y unos salones para bodas-bautizos-comunionen que harían las delicias de cualquier hortera venido a más. El hotel cuenta con un pequeño restaurante que puede llegar a ser muy íntimo y discreto y que los dueños del establecimiento cerraron esa noche para que en él se dieran cita cuatro personajes destacados. Allí llegaron el ministro Mariano Fernández Bermejo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la fiscal Dolores Delgado y el comisario de la policía judicial Juan Antonio González. Puede ser que hubiera algún comensal más presente, pero entre los gestos de complicidad sentimental de Garzón y Delgado y las bravatas de Bermejo, la conversación giró sobre un único asunto: la trama de corrupción en el PP. Garzón y Delgado pasaron allí la noche anterior a la montería. ¿Juntos? La llamada que recibió Garzón de su esposa unos días después en su despacho de la Audiencia Nacional y el «sofocón» con ingreso en el hospital por subida de tensión incluida como consecuencia de la misma, hacen pensar que sí.

Al día siguiente Garzón y Bermejo se trasladaron a la finca de Navaltorno, un coto de caza a cincuenta y cuatro kilómetros de Andújar. Pero la montería no iba a ser nada normal. De entrada, a los empleados de la cacería les obligaron a seguir su camino a pie a un kilómetro y medio del cortijo. Se les dio una bolsa con bocadillos y bebidas y les conminaron a que no se acercaran a los cazadores.

Navaltorno no es un lugar cualquiera. Allí han acudido de montería desde Franco hasta el Rey, y los empleados de la zona tienen en su memoria muchos recuerdos de tiempos pasados y presentes. La finca es el escenario perfecto para la escopeta nacional, por eso no es sorprendente oír comentarios como que «cuando venía Franco, nos trataba mejor»: «Aquí han venido a cazar Franco y el Rey y han estado todos juntos; no se ha comido en la misma mesa, pero la gente se ha podido acercar a saludarlos y a hacerse fotos. Con Garzón y el ministro no». Tal era su enfado, que a primera hora de la mañana los batidores se reúnen y se plantean abandonar la montería. «No lo hacemos por no dejar mal a Francisco Rodríguez, el administrador, el que nos contrata.»

La junta de la mañana fue muy rápida, nada parecido a lo habitual en una montería. La llamada junta de monteros se celebra en el desayuno y allí se sortean los puestos. La segunda junta se celebra tras el almuerzo y sirve para comentar la jornada y repartirse las reses. No fue así. De hecho, nada más celebrarse la junta de la mañana los postores colocaron a cada cazador en su sitio y, en lugar de quedarse a la montería, la abandonaron, por lo que los nueve cazadores que participaron en ella sólo se rodearon de los secretarios y los escoltas de Bermejo y Garzón. También esta circunstancia generó tensiones entre el personal de la finca y los escoltas de tan ilustres visitantes.

A Garzón y Bermejo se unió en la montería de Navaltorno el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Tomás Sanz, muy amigo del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Puede ser que entre las nueve personas que participaron en la cacería estuviera también el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González. ¿Por qué tanto celo? No se sabe, pero lo cierto es

que al día siguiente, domingo 8, las cosas cambian radicalmente. Garzón y Bermejo acuden al coto Cabeza Prieta de Torres, en Jaén, en un ambiente radicalmente distinto. Monteros y empleados comieron juntos, en el mismo salón, mujeres incluidas.

En Navaltorno se abatieron treinta y cuatro reses. Garzón y Bermejo consiguieron cuatro cada uno, que serían enviadas a un taxidermista de Andújar bajo las iniciales de B. G. y M. F. B. —¿alguien puede dudar de a quiénes se refieren?—. Esa noche ambos durmieron en el cortijo Cabeza Prieta, en Torres, pueblo natal del magistrado, y al día siguiente en ese mismo cortijo participaron en la segunda montería en la que se dio caza a ocho muflones y cinco jabalíes. El juez abatió tres muflones y Bermejo dos. Por la tarde volvieron a Madrid, después de una comida clásica a base de andrajos. ¿Pagaron ellos las cacerías y las piezas cobradas? Parece ser que no.

Los nueve puestos de la montería de Navaltorno costaron 22.500 euros, pagados por un empresario cuyo nombre no ha trascendido, pero entre el coste del puesto y el valor de las piezas, Garzón y Bermejo se ahorraron en torno a diez mil euros cada uno, sólo en esa montería. La de Cabeza Prieta tendría un coste parecido. Y mientras Garzón y Bermejo cazaban el fin de semana, cuatro imputados en la «Operación Gürtel» —dos hombres y dos mujeres— esperaban entre rejas a que el magistrado tuviera a bien tomarles declaración. ¿Inseguridad jurídica en un país desarrollado en pleno siglo XXI? Debería ser el Consejo General del Poder Judicial el que tomara cartas en asuntos como éste, pero los jueces actúan con un corporativismo envidiable.

La afición cinegética del ex ministro y el magistrado, además de otras derivadas muy graves en cuanto a la connivencia

de dos poderes que supuestamente deben ser independientes entre sí, ha puesto de manifiesto de manera muy palpable, y más aún en tiempos de crisis económica muy grave, esa visión patrimonialista del poder tan propia de ideologías autoritarias y de políticos sin escrúpulos o con muy poco sentido de la decencia moral y ética. Comportamientos tan propios de otras épocas que sorprenden por los recuerdos que traen a nuestra memoria. La alcaldesa de Torres, la socialista Elvira Sanjuán —lleva seis meses en el cargo—, no pudo ocultar que al conocer que el domingo 8 en el cortijo de Cabeza Prieta iban a cazar Garzón y Bermejo, ordenó que asfaltaran el camino que lleva del pueblo a la finca, con el fin de que invitados tan ilustres llegaran lo más rápido y cómodamente posible. Huéspedes que por su condición de ministros, de miembros del Gobierno, se creen tan a salvo de todo, tan por encima de las leyes que obligan a los demás y que ellos mismos hacen, que hasta se olvidan de que para cazar en España hace falta licencia, y que no existe una licencia nacional, sino que cada comunidad autónoma exige la suya. Por esa razón el ex ministro Bermejo ha sido castigado con una sanción de dos mil euros: no tenía licencia para cazar en Andalucía.

Con todo, ése no fue el coste más elevado. Independientemente de la trama de corrupción que afecta al PP, la cacería de Bermejo puso de manifiesto un comportamiento tan extraordinariamente ajeno a lo que debe ser el más fino y escrupuloso talante democrático, que la presión a la que se vio sometido el ministro le obligó a presentar su dimisión. Lo hizo el jueves 19 de febrero, un día después de que en la sesión de control al Gobierno fuera ovacionado por sus compañeros de partido al grito de «¡torero!, ¡torero!», pero con

los escaños de los principales miembros del Gobierno —el presidente, los vicepresidentes, los ministros de Interior, Exteriores, etcétera— vacíos, lo que trasladó la imagen de un ministro al que Zapatero estaba dispuesto a dejar caer. Había acumulado demasiadas polémicas —el ático reformado, el baile de su esposa en la campaña electoral, la huelga de jueces—, y la cacería había hecho que el PP rompiera todos los puentes de diálogo en un asunto vital para el buen funcionamiento democrático. Ese jueves Zapatero no le contestó, pero el lunes 23 Bermejo recibió una llamada en su despacho del Ministerio. Acudió al Palacio de La Moncloa y allí el presidente le dijo que sí, que aceptaba su renuncia al cargo. Ahora es un diputado de a pie al que pocos hacen caso, ni siquiera los mismos que le gritaban «¡torero!, ¡torero!».

CAPÍTULO II

UN REY QUE NO DA CUENTA DE SUS GASTOS

Es una triste condición tener pocas cosas que desear y muchas cosas que temer, y sin embargo, tal suele ser el caso de los reyes.

SÉNECA

SE metió en el bolsillo a los españoles la noche del 23-F y, desde entonces, don Juan Carlos I de Borbón mantiene una discreta vida privada alejada del debate mediático y de los *paparazzi*. Se había convertido casi en una figura intocable para los medios de comunicación, pero las cosas parecen estar cambiando lentamente. Los que siempre han hecho la vista gorda ante los rumores de lujo y derroche que le asedian desde hace unos años recogen cada vez con más frecuencia pequeños hechos aislados que hablan de un estilo de vida elitista. Cacerías en el extranjero rodeado de polémicas amistades, suntuosos coches cedidos por las marcas más prestigiosas, veraneos en Mallorca a bordo del gran «Fortuna» o una elevada asignación anual que no se congela ni en tiempos de crisis. Su figura ha dejado de ser incuestionable.

Alfonso XIII cobraba en 1922 siete millones de pesetas. Una auténtica fortuna. Así lo recogían las crónicas periodís-

ticas de la época, que daban cuenta de los sueldos y nóminas de todos los inquilinos del Palacio de Oriente. El príncipe heredero recibía 500.000 pesetas, la Reina, 450.000, y los infantes, 150.000.

Un siglo después, en plena era de las comunicaciones y de la información en tiempo real, tal privilegio informativo ha pasado a mejor vida. Una espesa capa de secretismo cubre todo lo que tiene que ver con las cuentas de Su Majestad el Rey. Conocer el coste exacto de la monarquía es una misión casi imposible. No existen datos pormenorizados de sus gastos, sólo el coste de algunas partidas presupuestarias que no cubren todos los dispendios de la más alta institución del Estado.

Preocupado por comparar su situación con la de otros soberanos europeos, el rey don Juan Carlos encargó en los años ochenta la elaboración de un estudio sobre cuánto trabajaban sus «colegas» europeos y el coste de esas otras jefaturas del Estado para sus ciudadanos. Pensaba entonces el Rey que en su agenda desplegaba una intensísima actividad de contacto con gran parte de la sociedad española. El informe, realizado por un amigo personal del Monarca, vino a confirmar sus sospechas de que trabajaba mucho y, además, a un precio muy inferior al de otros «compañeros» de sangre azul o presidentes de República.

Los Reyes atienden cada día decenas de citas oficiales y desarrollan, fuera de los focos, una abultada agenda de contactos con gran parte de la clase política española. Sólo en los dos primeros meses de 2009, don Juan Carlos y doña Sofía han visitado lugares como Pensacola y Miami, Jamaica, Trinidad y Tobago o Libia. Además, y según datos de su página web, han ofrecido un total de quince audiencias y participado

en actos como la Pascua militar, la entrega de credenciales, la jura y toma de posesión del nuevo ministro de Justicia o las recepciones y cenas de gala de mandatarios como el presidente ruso, Dmitry Medvédev, o la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Es curioso, por tanto, que con el paso de un siglo a otro, la Casa del Rey haya legitimado su papel democrático y perdido, sin embargo, transparencia en sus cuentas, que siguen siendo, según la Constitución, un secreto de Estado, uno de los grandes vacíos de nuestro sistema político.

Es imposible conocer, por ejemplo, cuánto se gasta la Casa Real en su factura de teléfono, cuánto cobran los funcionarios que trabajan a su cargo o cuál es el coste de mantenimiento del palacio de La Zarzuela. Ni siquiera algo tan simple como cuál es la retribución del Príncipe por su papel como heredero tiene respuesta. Datos que don Juan Carlos no está obligado a facilitar, como tampoco lo está su prima Isabel II de Inglaterra, que, sin embargo, airea desde al año 2001 todas sus facturas con una sorprendente minuciosidad. En el 2007, por ejemplo, su graciosa Majestad empleó 700.000 libras en sus conocidas fiestas en el jardín de Buckingham. Otros 12,2 millones sirvieron para costear las residencias oficiales y los salarios de su personal, 5,6 millones se destinaron a sus viajes y 500.000 libras para sus compromisos oficiales.

Al Rey le molesta profundamente que se frivolicé sobre su trabajo y cree que es deber del Gobierno publicitarlo. Pero a su vez no ha ayudado a despejar la opacidad de sus cuentas ni ha hecho un signo externo de apretarse el cinturón en tiempos de crisis como los que afrontamos, en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido

congelar el sueldo de todos sus ministros y altos cargos. Quienes esperaban del Monarca un gesto de contención que diera ejemplo al resto de las instituciones se quedaron con las ganas.

En efecto, durante el año 2009 don Juan Carlos recibirá de las cuentas del Estado 8,896 millones de euros, un 2,7% más que en 2008 (8,6 millones de euros). Un aumento que no hace más que cargar de razones a quienes defienden la instauración de una III República. Tal y como establece el artículo 65 de la Constitución, el Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que «distribuye libremente» sin tener por qué dar explicaciones a nadie.

Pero lo que quizá muchos desconozcan es que el coste de la Jefatura del Estado no se financia, únicamente, con esa cantidad, sino que también entran en juego otras aportaciones distribuidas en diferentes capítulos de los presupuestos. El hecho de que estas otras partidas no aparezcan suficientemente desglosadas hace muy complicada la auténtica contabilidad de la Casa Real.

En la práctica, a esos 8,8 millones hay que sumar la cantidad consignada bajo el epígrafe «Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado», que corre a cargo del Ministerio de Administraciones Públicas. En 2009 asciende a 6.535.520 de euros, de los que 6,2 millones se destinan al pago de los salarios de las 139 personas cuya retribución abona la Casa Real.

Tampoco sale de las arcas del Monarca el mantenimiento y el servicio del palacio y las residencias reales de La Zarzuela o Marivent, lugar este último, donde curiosamente el Rey no pasa sus vacaciones, sino que «traslada temporalmente»

su residencia durante los meses de verano, tal y como explica su departamento de comunicación.

A todos estos gastos hace frente Patrimonio Nacional, un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia y que aglutina todos los reales sitios desde El Escorial hasta el palacio de La Granja. El hecho de que tampoco desglose su presupuesto según cada palacio (143 millones para este 2009), impide, de nuevo, calcular el coste de las residencias del jefe del Estado y que incluyen también la nueva casa en la que vive el Príncipe de Asturias, situada en el complejo de La Zarzuela, o cada uno de los chalés que existen en Marivent para los hijos de los Reyes.

Fue Patrimonio quien sufragó los 4,2 millones de euros que supusieron, en 2002, la construcción de la residencia privada del heredero. Aportó también mobiliario y objetos decorativos de gran valor, aunque de dudoso gusto, según los especialistas. El diseñador Javier Mariscal, creador de *Cobi*, llegó a decir que era «una amalgama de chapuzas, un quiero y no puedo con un aire a hotel provincial de tres estrellas», a lo que don Felipe respondió que la decoración se la habían «impuesto». El edificio principal tiene una superficie de 3.150 metros cuadrados y, según una estimación realizada por el diario *El Mundo* tras consultar a varios expertos, la factura total de la mansión de cuatro plantas podría ascender a unos 360.000 euros anuales (Crónica, 29 de junio de 2003).

El heredero no dispone, oficialmente al menos, de un organismo denominado Casa del Príncipe, tal y como ocurre en otras casas reales europeas. La Constitución, en este sentido, es tajante al hablar sólo de una única Casa, la del Rey, que presta sus servicios al heredero. Esto evita que se duplique la burocracia o, por ejemplo, que existan errores de

descoordinación entre ambas instituciones o que dos jefes compitan entre sí por la defensa de sus respectivos señores.

Patrimonio cuenta también con una partida para Servicios a la Corona y actos de Estado. En 2007 se destinaron 19,28 millones a ese fin, 1,2 más de lo presupuestado. Para 2009 los presupuestos incluyen 17,3 millones. Y, por si todo esto fuera poco, Patrimonio acaba de presupuestar otros 3,3 millones de euros para «redecorar» el Palacio de la Zarzuela. Una medida que fue aprobada el pasado mes de noviembre por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que adjudicó varios contratos para remozar el complejo residencial del Monarca: 163.000 euros para la reforma de la piscina exterior, 935.000 para ampliar y reformar el control de acceso a Palacio, 300.000 euros para la ampliación de la Zona P de la Zarzuela, 30.500 euros para las mejoras ornamentales en los jardines, 297.000 para las «actuaciones de jardinería, medio ambiente y otras de apoyo a la arquitectura» y 78.000 euros para la renovación de las instalaciones eléctricas de Marivent.

Una de las mejores colecciones de coches

Idéntica situación se repite en relación a los coches oficiales utilizados por los Reyes para sus actos protocolarios. Es el Parque Móvil del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, quien se hace cargo de su mantenimiento y corre con sus gastos de combustible. Durante años, la Casa Real ha sido la institución que ha presentado siempre la factura más cara de carburante. Al menos así quedó reflejado hasta el año 1994, cuando el Ministerio decidió suprimir tanta especificación en su memoria económica.

Entonces la Casa Real gastaba una media de 77.000 pesetas diarias en gasolina.

En el Parque Móvil de la Casa Real hay setenta y un vehículos, entre los que se conservan auténticas joyas de la automoción y piezas de coleccionista. Es el caso, por ejemplo, del Rolls-Royce Phantom IV, considerado el «Rolls de reyes», creado en 1950 como un regalo especial para el aniversario de bodas de Isabel II de Inglaterra. Debía ser el modelo más exclusivo de la casa. Y así lo ha sido hasta el punto de que sólo existen dieciocho unidades, varias en paradero desconocido. Cuenta con un motor de 5.675 cm cúbicos y un logotipo específico: la conocida estatuilla de la marca, «Emily» o «Espíritu de Éxtasis», aparece arrodillada en símbolo de reverencia y respeto hacia los ilustres clientes a los que está llamada a transportar.

Patrimonio Nacional conserva tres de estos modelos en el Palacio de El Pardo, encargados en 1952 por el General Franco. Pero sólo salen a la calle en ocasiones muy especiales, la última con motivo de la boda del príncipe Felipe con Letizia Ortiz.

En total, Palacio cuenta con sesenta y cinco personas entre conductores, personal de oficina y lavacoches para mantener a punto todos los vehículos aparcados en tres grandes almacenes: uno en La Zarzuela, otro en El Pardo, donde se guardan las famosas motos del Rey, y el último en los bajos del Palacio de Oriente, junto al jardín del Moro.

Todos los miembros de la familia conducen sus propios coches particulares, pagados de su propio bolsillo. Amante de los coches de gran cilindrada, especialmente de los deportivos, el Rey tiene también el privilegio de conducir increíbles vehículos «prestados» o «cedidos» por un tiempo indeterminado por las marcas más exclusivas.

En 2006, por ejemplo, don Juan Carlos recibió temporalmente un Maybach 57S de manos del presidente de Daimler-Chrysler, Dieter Zetsche. Pero la casa con la que quizá hay una relación más fluida es Audi. En 1988 su presidente, Ferdinand Piech, entregó al Rey un Audi A8 después de que éste lo hubiera probado durante un tiempo. En 2003 Zetsche tuvo a bien repetir el mismo gesto con el príncipe heredero, a quien regaló un Audi RS6, con un precio en el mercado superior entonces a los cien mil euros.

Es ésta, quizá, una de las caras menos conocidas de nuestro Monarca, no exenta tampoco de polémica. El 27 de diciembre de 1990 el Rey sufrió un accidente a bordo de un Porsche 959 cuando se dirigía con la infanta Cristina al Pireneo leridano. El vehículo se salió de la carretera al derrapar sobre una placa de hielo y, aunque los ocupantes no sufrieron ningún daño, el incidente puso de manifiesto una faceta ostentosa de don Juan Carlos que muchos, desde su entorno, le aconsejaron ocultar. Al verlo llegar malherido, Sabino Fernández Campo, jefe entonces de la Casa Real, comentó: «Un rey sólo puede volver así de las Cruzadas».

Es un secreto a voces que al Rey le apasiona surcar las carreteras a una velocidad trepidante. Cuentan sus guardaespaldas que cada vez que se pone al volante la guardia real tiembla. Y efectivamente, así ocurrió el día del accidente, al que los encargados de su seguridad llegaron varios minutos después de que don Juan Carlos se hubiese salido de la calzada. Polémico fue también el origen del coche, del que se supo después que había sido un regalo de cumpleaños realizado por un grupo de diez empresarios encabezados por Javier de la Rosa. Estaba valorado en 24,5 millones de pesetas

Otra «cesión» fueron los dos Nissan 350Z, un deportivo

biplaza de 280 caballos valorado en más de 40.000 euros que recibió el Rey en el año 2003. Aunque también la alemana Mercedes es otra de las proveedoras habituales de la Casa Real, con modelos como un deportivo SL55 AMG valorado en 150.000 euros, varios todoterrenos o el Smart que el Rey regaló a Doña Sofía. Desde la marca aclaran, sin embargo, que el Rey siempre paga «religiosamente».

Don Juan Carlos también aceptó como regalo del magnate Malcom Forbes una Harley Davidson, y del diseñador Nicola Trussardi una MV Augusta que éste le dejó en herencia.

Un yate por «Fortuna»

Al proceder del exilio, la Familia Real española es bastante insólita, pues no posee propiedades inmuebles ni terrenos. Todo lo acumulado generación tras generación pasó en su día a Patrimonio Nacional y así se sigue haciendo hoy en día, para lo bueno y para lo malo, con todas las dádivas que el monarca recibe. Así, por ejemplo, los Reyes no vendieron el palacio que les regaló a título personal el rey de Jordania, sino que lo entregaron al Estado. Pero también esto tiene su parte ventajosa, pues permite que otro tipo de regalos no generen problemas de oportunidad porque pasan a ser, inmediatamente, propiedad de Patrimonio Nacional. Es el caso, por ejemplo, de los sucesivos yates que el Rey ha utilizado durante sus estancias en Mallorca. El último «Fortuna», por ejemplo, fue regalado en el año 2000 por una veintena de empresarios ligados al turismo mallorquín. La embarcación costó alrededor de tres mil millones de pesetas, el triple de la asignación presupuestaria de aquel año destinada a la Casa Real. Oficialmente es propiedad del Estado, quien se encarga

de su mantenimiento, aunque sea de uso exclusivo de los miembros de la Casa Real y ningún ciudadano de a pie haya podido nunca deleitarse navegando en él aunque fuese sólo un día al año.

Entre otras características, la embarcación tiene cincuenta y siete metros de eslora, dos motores diesel, tres amplias cubiertas y su casco es de aluminio, diseñado para alcanzar setenta nudos de crucero (130 km/h). La idea del regalo partió de José Francisco Conrado de Villalonga, ex delgado de Bankuni3n en Baleares, y entre los mecenas se encuentran los gigantes del turismo. Nombres como el de Gabriel Escarrer, de Sol-Meli3; Gabriel Barcel3, del Grupo Barcel3; Carmen Matutes, la hija del entonces ministro de Asuntos Exteriores; Miguel Flux3, de Viajes Iberia-Camper; Carmen Garc3a, de Soltour; Juan Jos3 Hidalgo, de Air Europa; Miguel Ramis, de Grupotel, o Gonzalo Pascual, de Spanair, entre otros.

Todos ellos constituyeron a tal efecto una sociedad llamada Fundaci3n Tur3stica y Cultural de las Islas Baleares. Carmen Matutes explicaba en el a3o 2000 que el obsequio era «una forma de pedirle al Rey que siga viniendo por aqu3 a pasar sus vacaciones». «Cuando la familia real est3 aqu3 en Mallorca sale en todos los medios nacionales e internacionales y es de bien nacidos ser agradecidos», explicaba a una periodista del semanario *El Siglo*. Todos los empresarios consiguieron, eso s3, una importante desgravaci3n fiscal por la donaci3n del barco a una entidad de inter3s cultural.

Pero volviendo al tema de los gastos que rodean a la Jefatura del Estado, hay que aclarar tambi3n que los Reyes tampoco hacen frente con el dinero destinado a la Casa Real a sus m3ltiples viajes por el extranjero. De ellos se responsabiliza el Ministerio de Asuntos Exteriores, que, para el a3o 2009,

ha previsto 345 millones de euros. Es éste un punto, sin embargo, en el que año tras año suelen producirse importantes desfases. En 2008, por ejemplo, se previeron un total de quince desplazamientos que se convirtieron, finalmente, en dieciocho, lo que hizo que, en la práctica, el presupuesto se disparase de los 345.000 euros iniciales a los 522.380 euros realmente gastados.

Una corte de 139 empleados

La pregunta, por tanto, es a qué se destinan los 8,89 millones de euros que don Juan Carlos ha recibido este año de las grandes cuentas del Estado. En realidad, de este fondo sale un número de gastos muy concretos que están relacionados con los salarios de los altos cargos que trabajan al servicio del Monarca.

Según los presupuestos de 2009, el número de empleados fijos y eventuales que trabajan en Palacio ha pasado de 129 a 139. Entre ellos están el personal de alta dirección: el del jefe de la Casa Real, Alberto Aza, que tiene categoría de ministro y que, por tanto, recibe un salario de 81.155 euros; el secretario general, Ricardo Díez-Hochleitner, con categoría de secretario de Estado y un sueldo de 73.692 euros; así como los responsables de los gabinetes de coordinación (con unos veinticinco empleados), la secretaría de la Reina, que atiende también a las infantas (entre diez y doce personas), la secretaría del Príncipe de Asturias (unas quince), la Jefatura de Medios de Comunicación, el departamento de protocolo, el de seguridad y los responsables de los servicios de Administración, informática y personal. El jefe del Cuarto Militar (un teniente general) y los ayudantes (con categoría de te-

niente coronel para el Rey y de comandante para el Príncipe) pertenecen al Ministerio de Defensa y es este departamento quien paga sus salarios.

Pero en la Casa Real hay muchos más empleados trabajando: un numeroso grupo de personas dedicadas en exclusiva a la protección y seguridad de la más alta autoridad del Estado y su familia. En este caso, todos los guardaespaldas reciben sus retribuciones directamente del Ministerio del Interior; otro dato más que imposibilita calcular el coste total de la institución. La infanta Cristina, por ejemplo, ha llegado a tener a ochenta y cinco agentes de seguridad distribuidos en cinco turnos. Han aumentado su número después de que el pasado 13 de septiembre una persona con las facultades mentales mermadas atacase con un artefacto incendiario el chalé en el que doña Cristina e Iñaki Urdangarín viven en el barrio barcelonés de Pedralbes. Antes del incidente se dedicaban a su protección cincuenta y dos agentes, que se redujeron después a cuarenta y cinco porque a la infanta le incomodaba tener a tanta gente alrededor.

El «Annus Horribilis» de don Juan Carlos

La expresión la hizo célebre Isabel II de Inglaterra cuando en el año 1992 vio como su familia se hacía añicos por las crisis matrimoniales de sus hijos al tiempo que su querido Castillo de Windsor era consumido por las llamas. Don Juan Carlos, sin embargo, vivió ese año para el olvido en 2007, cuando varias crisis en torno a la Casa Real explotaron al mismo tiempo y en distintos frentes.

La infanta Elena «cesó temporalmente» su convivencia con el estrafalario Jaime de Marichalar. Federico Jiménez Losan-

tos, comunicador con notable influencia sobre la derecha, dedicó al monarca algunos de sus dardos matinales y llegó a pedir incluso que abdicase por no haber defendido la unidad de España en la negociación del Estatut. Al mismo tiempo, decenas de jóvenes independentistas catalanes quemaron fotografías de los Reyes en varias revueltas callejeras. Y para colmo, la revista satírica *El Jueves* ridiculizó obscenamente a los príncipes Felipe y Letizia en una postura sexual que mereció el secuestro de la publicación y que abrió el debate sobre la libertad de expresión en torno a la figura del Rey.

Un año complicado en el que, por si todo esto fuera poco, don Juan Carlos abrió sendas crisis diplomáticas con Venezuela y Marruecos. Con la primera por el polémico «¿Por qué no te callas?» que el Rey le soltó en plena cumbre Iberoamericana a Hugo Chávez. Y con nuestro vecino del Sur por la primera visita oficial de su reinado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en donde los Reyes fueron recibidos en loor de multitudes.

El propio don Juan Carlos tuvo que salir entonces en defensa de la institución que representa y vincular «el más largo período de estabilidad y prosperidad en democracia» con la Corona.

Fue ése también el año en el que los nacionalistas de Esquerra Republicana plantearon en el Congreso de los Diputados cien preguntas al Gobierno sobre los gastos del Rey. La Mesa de la Cámara Baja rechazó la admisión a trámite de todas esas iniciativas alegando que, conforme a lo dispuesto en la Constitución, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Según nuestra Carta Magna, la institución de la Casa Real no se somete al escrutinio y el control ni del Tribunal de

Cuentas, ni de la Intervención General del Estado, como tampoco lo están otras instituciones como el Tribunal Constitucional, las Cortes o el Consejo General del Poder Judicial. Son instituciones que no pueden ver mermada su independencia, como ocurriría si sus cuentas fueran fiscalizadas por organismos dependientes del gobierno de turno. Pero de ahí a no hacerlas accesibles a la opinión pública hay un trecho.

Sea como fuere, la verdad es que el año 2007 acabó también con un novedoso nombramiento dentro de la Corte. El de Óscar Moreno Gil como interventor y gestor económico de la Casa Real. Muchos creyeron equivocadamente que su llegada a Palacio traería consigo una mayor publicidad y transparencia de las cuentas del Rey. La Zarzuela justificó entonces que se trataba de una «decisión burocrática» más y descartó que estuviera relacionada con las demandas de los diputados de ERC que, tras la negativa del Congreso, habían llevado sus peticiones hasta el Tribunal Constitucional.

Moreno Gil se encarga, según Zarzuela, de la «gestión económica, financiera, presupuestaria y contable» de la Casa del Rey. Completa la labor realizada hasta entonces por el interventor militar de la Casa, que se sigue ocupando del Cuarto Militar. Este veterano de setenta y dos años en el momento de ser nombrado, es un experto en Derecho Administrativo llegado del Cuerpo de Interventores del Estado; fue número uno de su promoción, ha impartido clases en el CEU y es autor de diversos manuales como «Contratos administrativos: legislación y jurisprudencia» y «Código Civil y jurisprudencia».

Los Reyes, los Príncipes de Asturias, las Infantas y sus esposos pagan sus impuestos y presentan anualmente sus de-

claraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio. La Familia Real pactó en 1978 las cantidades que todos sus miembros declararían a Hacienda. Según contó Soledad Gallego Díaz en un reportaje en el diario *El País*, «esas cantidades se revisaron en 1988 y quizá en fecha posterior, aunque no ha sido posible confirmarlo».

Es una incógnita saber cuánto perciben los vástagos del Rey por su papel de representación. La Casa Real señala que ninguno de los hijos de don Juan Carlos posee un sueldo a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que sólo cobran por los acontecimientos oficiales en los que participan. Sí se conoce, sin embargo, que las infantas compagan ese papel con su trabajo en empresas privadas, lo que para muchos es un ejemplo de responsabilidad. La infanta Elena, licenciada en Magisterio, ha trabajado como profesora de inglés en el Colegio Santa María del Camino y en la «Escuela infantil Micos – Mi primer cole». Entre los nuevos cambios que ha incluido a su nueva vida sin Marichalar (se ha mudado a un nuevo piso de 468 metros cuadrados), está su incorporación a la Fundación Mapfre, en donde preside, desde septiembre de 2008, el área social de la entidad. Según detalló la revista *Hola*, la primogénita del Rey dispone de despacho propio, una jornada partida y un sueldo de 200.000 euros al año.

Es un trabajo casi idéntico al que desempeña su hermana, la infanta Cristina, en la Fundación La Caixa, por el que recibe, tal y como asegura la prensa rosa, un salario parecido. Su marido, volcado en su faceta de empresario, está presente en los consejos de Administración de Axa y Telefónica Internacional, en donde acaba de ser nombrado consejero de la compañía en Estados Unidos y Latinoamérica. Urdangarín

dejó, sin embargo, la dirección del Instituto Nóos poco después de que se conociese que el Gobierno balear abonó en 2006 1,2 millones de euros públicos a la citada institución por la organización de unas conferencias que duraron apenas tres días y que supusieron un enorme despilfarro del erario.

Un Rey que «nunca» está de vacaciones

Puntual cada año, don Juan Carlos no ha faltado a un solo verano en Mallorca desde 1973. Allí, como ya hemos señalado, el Rey «traslada temporalmente» su residencia durante el período estival. Y allí, aunque lo veamos disfrutando de las regatas, paseando con sus numerosos nietos o haciendo buen uso del «Fortuna», nunca podremos decir que está de vacaciones. No de vacaciones *in abstracto*, al menos.

Poco se conoce de la agenda privada del Rey y del resto de miembros de su familia en Marivent. Una residencia que, por cierto, fue donada por los herederos de su propietario, el pintor Saridakis, para que se convirtiera en un museo sobre su legado y no en un palacete de veraneo.

Como señalaba irónicamente el periodista mallorquín Matías Valles en su columna veraniega de *El Confidencial*, don Juan Carlos «muestra una curiosa propensión a ausentarse cuando la actualidad se sale de sus raíles. O viceversa, los acontecimientos tienden a encadenarse en cuanto el Rey se toma un respiro».

Y es que no es la primera vez en que un acontecimiento informativo de trascendencia ha pillado al Monarca con el pie cambiado y disfrutando de un retiro en alguna zona desconocida del planeta. La última, por ejemplo, con motivo del accidente aéreo de Spanair. Vallés, en este sentido, proseguía:

El Rey no se hallaba en Mallorca el día del accidente de Barajas, aunque la insistencia en no ubicar el lugar desde donde «siguió al minuto la evolución de los acontecimientos» podía alentar ese equívoco [...]. El miércoles, conforme crecía el goteo de muertos de la catástrofe de Barajas, retomó sus labores desde una geografía ignota. La reaparición tuvo lugar en compañía de la Reina, que en Pekín ha efectuado más declaraciones a la prensa que en el conjunto de los últimos años [...]. La extrapolación de su veraneo mallorquín a latitudes ignotas coincidió en la anterior legislatura con otro siniestro aéreo, el accidente de un helicóptero militar en Afganistán, que se tradujo en diecisiete muertes en agosto de 2005. En aquella ocasión don Juan Carlos cazaba en África con un rifle de altísima precisión recién adquirido. También allí recibió información puntual de lo ocurrido.

Otra anécdota más. Felipe González creó un conflicto institucional cuando gobernaba, al desvelar que una ausencia del Rey impedía la publicación en el BOE de una iniciativa legal que precisaba del concurso de su firma. Pero uno de los acontecimientos que más dejó patente la ausencia injustificada del Rey de España se produjo con el nacimiento de su enésima nieta, la infanta Sofía, tercera en la línea de sucesión al trono. Don Juan Carlos no apareció por la Clínica Ruber hasta dos días después del feliz alumbramiento, aunque para ese momento su ausencia ya había disparado todos los rumores. Debía de estar por aquellos días, según parece probado, compartiendo andanzas y jornadas de carcería con el presidente vitalicio de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev. Sabedor del debate que había generado su tardanza, el Rey no compartió anécdotas con los periodistas y se limitó a saludarlos fugazmente desde las puertas de la clínica.

«Y es raro», comentaba *El País*, «porque el Rey suele ser cómplice de la prensa y aportar detalles para las crónicas».

Tras su ejemplar papel protagonizado frente a los golpistas el 23-F, existe una especie de acuerdo tácito de no hurgar en los asuntos internos de la Familia Real y dejar su vida privada fuera de los focos. Algo que cada día le trae más quebraderos de cabeza al Monarca, que ve como los programas de corazón y las revistas del papel *couché* le dedican cada vez más atención a todos los miembros de su familia.

Pero mantener siempre la discreción es una tarea complicada. De piedra se debió de quedar don Juan Carlos cuando supo que Mitrofán, el oso ruso más famoso de la historia al que abatió de un solo disparo, estaba, en realidad, borracho. Así lo denunció en una carta abierta el funcionario local, ex policía, cazador y jefe de guardabosques, Serguei Starostin, quien acusó a las autoridades locales de Vólogda de amañar la montería del Rey y de haber emborrachado a Mitrofán «con abundante vodka mezclado con miel». El incidente llegó hasta la Audiencia Nacional en forma de una viñeta satírica publicada por los diarios *Gara* y *Deia*. El juez acabó absolviendo a sus responsables «por poco» de un delito de injurias al Rey.

El más barato de los jefes de Estado europeos

Aun con todo y a pesar de la dificultad que entraña conocer el coste real de la Jefatura del Estado, siempre se ha considerado que la Casa Real española es una de las más económicas de su entorno si se compara con los gastos que generan otros soberanos o presidentes de República. El más caro, sin duda, el italiano Giorgio Napolitano, que cuesta lo mismo que cuatro

reinas de Inglaterra: cerca de 235 millones de euros, que sirven, entre otras cosas, para pagar los salarios de más de novecientos empleados y que se gestionan de forma aún más opaca que en España.

En Inglaterra, Isabel II recibe unos cincuenta millones de euros al año, cifra que no recoge los costes de su seguridad, pero sí los salarios de su personal desglosados en su Lista Civil y el mantenimiento de sus dependencias o las ayudas para sus viajes. El príncipe de Edimburgo recibe también directamente más de medio millón de euros para sus gastos personales. Y a todo esto se unen los ingresos que generan los Windsor de sus propiedades. Por ejemplo, Carlos de Inglaterra obtiene casi once millones de euros anuales de sus tierras en el ducado de Cornwall.

La monarquía holandesa es, por su parte, quizá una de las más ricas del mundo, con una fortuna valorada por la revista *Eurobusiness* en más de dos mil millones de libras esterlinas. En 2006 la reina Beatriz recibió 4,2 millones de euros, que incluyen el coste de su seguridad, pero no los gastos de sus palacios ni su viajes; el príncipe Guillermo recibió 1,1 millones de euros y su esposa, la princesa Máxima, otros 893.000 euros.

Mantener a nuestra Monarquía nos cuesta a cada español unos diecinueve céntimos al año si atendemos a la cifra global que reciben los Reyes de los Presupuestos. El gasto está aún muy lejos de igualar al de otras casas de sangre azul. Cada súbdito británico paga, sin ir más lejos, casi 92 céntimos a su soberana. Uno de los monarcas más caros del mundo es el sueco Carlos Gustavo, que cuesta a sus contribuyentes 10,5 millones de euros, lo que dividido entre los nueve millones de personas que viven en el país, da un desembolso individual de 1,16 euros al año.

Don Juan Carlos ha gozado durante su reinado de un respeto periodístico y popular que para sí querrían muchos otros soberanos del viejo continente. Pero los últimos escándalos que se han relacionado directa o indirectamente con la Casa Real han puesto de manifiesto las dudas que aún persisten sobre el futuro de la Monarquía, sobre el porvenir de una institución que tiene que superar los recelos de un gran número de ciudadanos que se proclaman solamente «juancarlistas». Cuestión de formas y de gestos. En ello reposa la autoridad de una de las instituciones más longevas de la historia.

Presupuesto de la Casa Real en los últimos años	
2004	7,513 millones de euros
2005	7,776 millones de euros
2006	8,048 millones de euros
2007	8,28 millones de euros
2008	8,66 millones de euros
2009	8,896 millones de euros